

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ocho días del mes de noviembre de 2011, a la hora 16 y 31:

Sra. Presidenta (Ibarra).- Queda abierta la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, que presido, y de Justicia, presidida por el señor diputado Tunessi, quien se encuentra sentado a mi lado copresidiendo.

Quiero saludar a todos y a todas: a los legisladores y legisladoras presentes, y a quienes militan en las distintas organizaciones sociales que hoy nos acompañan.

Esta reunión es, de alguna manera, la continuación de la que se celebró con anterioridad para tratar distintos proyectos vinculados con la sanción de una ley sobre respeto y reconocimiento a la identidad de género. En aquella reunión se habló de los consensos a los que se había arribado; escuchamos a los representantes de las organizaciones sociales y a los referentes de la comunidad trans, quienes contaron sus experiencias y dieron a conocer sus puntos de vista, explicando la problemática que enfrentan al no tener una ley como la que estamos proyectando, que reconozca la identidad de género de acuerdo a como es percibida.

En aquella oportunidad, se encomendó a las presidencias de ambas comisiones -representadas por el señor diputado Tunessi y quien habla, respectivamente- la tarea de desarrollar un dictamen para poder avanzar. Hemos trabajado muchísimo, y en este punto quiero dar un agradecimiento especial al señor diputado Tunessi y a las señoras diputadas Conti y Di Tullio por la buena disposición que verdaderamente han tenido para trabajar en el tema. No mencionaré a todos, pero también trabajamos muchísimo junto con las distintas organizaciones sociales, particularmente con los referentes trans de cada una de ellas.

Así fue como, con un fuerte consenso, llegamos a la elaboración de un texto. Por eso hemos convocado a esta reunión, para ver si es posible emitir un dictamen. Tenemos gran expectativa en que antes de fin de año podamos contar con la sanción de la Cámara de Diputados; por supuesto, ello será posible si contamos con un dictamen de comisión.

Desde las presidencias de ambas comisiones enviamos a los diputados y diputadas el texto del dictamen que elaboramos junto con los representantes de las distintas organizaciones sociales. Adelanto desde ya mi vocación de firmar el dictamen en los términos que ha sido redactado.

Hechas estas consideraciones, queda abierta la lista de oradores para que se anoten quienes deseen hacer uso de la palabra.

El señor diputado Tunessi me pidió hacerlo en primer término, así que le concedo el uso de la palabra al señor presidente de la Comisión de Justicia.

Sr. Tunessi.- Señora presidenta: tenemos gran expectativa en que hoy podamos dictaminar, porque la verdad es que hemos alcanzado acuerdos mayoritarios en ambas comisiones.

Si bien intentamos avanzar en ese consenso y en la obtención de las firmas necesarias para suscribir el dictamen, entendimos el derecho de quienes pedían la realización de una nueva reunión plenaria de las dos comisiones para escuchar distintas opiniones y disidencias antes de dictaminar.

Simplemente quiero decir que desde nuestro bloque, la señora diputada Giudici impulsó un proyecto que, junto con las iniciativas presentadas por las señoras diputadas Conti y Di Tullio, han dado origen al texto del dictamen sobre el que ahora estamos discutiendo. Acercamos posiciones, cambiamos algunos criterios a fin de lograr un acuerdo, y finalmente llegamos a un

consenso que quizás hoy nos permita emitir un dictamen que, sin ser grandilocuente, me gustaría calificar de histórico.

Es un hecho importante, valioso en la Cámara de Diputados, porque todos fuimos aprendiendo sobre el tema. Escuchamos con mucha atención las distintas opiniones, participamos en el debate y nos fuimos adentrando en una problemática vinculada con la discriminación, la invisibilización de nuestros semejantes, de seres humanos que sufren una postergación y una humillación inaceptables desde el punto de vista social. Nos sensibilizamos frente a las opiniones de quienes con altura, mucha estatura, condiciones y calidades han defendido la necesidad de contar con una regulación.

Escuchamos exposiciones de altísimo nivel de parte de las organizaciones que nuclean a quienes reclaman esta legislación. En muchos casos, sin apelar a sensiblerías baratas, han contado experiencias de vida que nos colmaron de una voluntad positiva para avanzar en el tema.

En síntesis, hemos vivido una experiencia valiosa que también tiene el valor de una lucha: la de las organizaciones que contra viento y marea, y pese a la incomprensión generalizada, lograron abrirse camino. Primero, encontrando diputados y diputadas que reconocieran sus derechos y presentaran un proyecto de ley; luego, bregando por llegar finalmente a este día que será valioso si logramos emitir dictamen.

Quiero agradecer a los representantes de las diferentes organizaciones y a todos los que trabajaron en la elaboración de este texto porque junto con ellos hemos crecido. Intentaremos quitar un baldón, restar una causa de discriminación, para que la sociedad sea un poco más tolerante con sus semejantes.

Vamos a apoyar este texto que básicamente contiene todas las demandas que se han hecho. Creo que es un buen dictamen, que de alguna manera nos identifica a todos con una nobilísima causa: la reivindicación de la igualdad y el derecho a la inclusión.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Como algunos diputados que no son integrantes de las comisiones que han intervenido en el estudio de este tema me han comentado que no tienen el dictamen, voy a explicar los puntos centrales del texto que hemos elaborado.

Ante todo se establece, por supuesto, el derecho a la identidad. Se define el concepto "identidad de género" para referirse a aquellas personas cuya percepción sobre su propio género no coincide con el sexo asignado al momento de nacer.

A ellas se les permite tener su propia identidad de género mediante la modificación del documento nacional de identidad, trámite que se realizará a partir de procedimientos administrativos ante el Registro Civil sin la exigencia de operaciones o pruebas que, en algunos casos, resultan fuertemente invasivas para las personas. Es decir que la tramitación no estará condicionada a ningún tipo de intervención médica.

No se cambia el número de DNI, se hace la rectificación registral y el cambio de prenombre.

Actualmente, ya existe resolución del Ministerio del Interior que posibilita la foto. Es decir, nosotros estamos incorporando también esto como derecho legal.

Además, en el artículo 11 se establece que el Estado garantizará el derecho a los procedimientos de salud, tanto tratamientos hormonales como quirúrgicos, y que éstos son parte del derecho de la identidad, lo cual se vincula con el ejercicio de esos derechos; motivo por el cual la operatividad del derecho y el derecho integral a la salud está previsto en los términos que establece como concepto de salud la Organización Mundial de la Salud. El Poder Ejecutivo reglamentará este artículo. Se establece

la edad de 18 años para poder hacerlo. En el caso de las personas menores de 18 años, debe existir la expresa conformidad del menor y la autorización de sus representantes legales.

Finalmente, se fija la necesidad de incluir estas informaciones en el registro de reincidencia y demás organismos que establezca la reglamentación, quedando claro que esa información de ninguna manera puede ser pública sino que sólo puede acceder la persona o por orden del juez, por supuesto, de forma tal que no haya ningún punto que permita utilizar algo como estigma por parte de aquellos que todavía utilizan estos temas por cuestiones de discriminación.

Centralmente, éste fue un trabajo muy amplio, donde participaron las organizaciones sociales. Se consensuaron todos los proyectos. Es un trabajo colectivo muy fuerte que hicimos entre las dos comisiones.

Estos son los contenidos básicos del dictamen que se pone a consideración, para que todos los presentes lo escuchen sabiendo que se recogieron todas las expectativas.

Está en línea, por supuesto, con los principios de Yogyakarta y la jurisprudencia más moderna que ya tenemos en algunos tribunales en la Argentina, con las propuestas y los planteos que ha hecho Human Rights Watch y, sin dudas, logramos llegar a ella como una legislación de avanzada en este sentido, de la cual la Argentina, una vez más, se siente orgullosa.

Habiendo hecho un resumen del contenido del dictamen, vamos a pasar a quienes han pedido el uso de la palabra. Nosotros estamos para dictaminar. Tenemos pedido de la palabra de tres diputados.

Tiene la palabra la señora diputada Giudici.

Sra. Giudici.— Señora presidenta: mientras la escuchaba atentamente recordaba otro escenario, de hace unos cuantos años cuando compartimos, en el anfiteatro, una visita que recordamos las dos, y mucho, convocada por César Cigliutti y por Marcelo Suntheim. Estuvo Pedro Zerolo, que era concejal del PSOE, quien vino a contarnos él éxito en la lucha y en la conquista de la legislación de España para el matrimonio igualitario. Nosotras, en aquella época, decíamos: "No sé. ¿Será posible? Vamos a plantear los proyectos."

En aquel momento discutíamos en la Argentina la unión civil como una gran conquista en algunos distritos como la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país. Mucho ha pasado desde aquel momento y tengo la suerte de finalizar mi mandato viendo cómo el esfuerzo de consenso y el trabajo personal de cada uno de los diputados de distintos bloques y, por supuesto, la invalorable lucha de las organizaciones, hizo que hoy en la Argentina el matrimonio igualitario sea ley.

Lo veo a César y cuando hablábamos, entonces, también de la problemática de la discriminación y de toda la situación de postergación, de los derechos de las minorías sexuales, hablábamos del tema de la identidad de género quizás como uno de los más importantes factores a resolver para caminar a favor de un trato más igualitario y del cumplimiento de los derechos de todos y todas.

El año pasado presenté un proyecto en ese sentido y a partir de ahí se pudo lograr esta sinergia que hace que hoy podamos tener un dictamen listo para firmar, algo que espero podamos hacer si tenemos número para ello.

Por eso, quiero destacar y agradecer el trabajo de los presidentes de las comisiones de Legislación General y de Justicia, diputada Vilma Ibarra y diputado Tunessi, respectivamente, y del resto de los diputados de los bloques, por haber priorizado en este caso la búsqueda de consensos más allá de cualquier bandería política o de cualquier búsqueda de figuración. Creo que éste es un

gran ejemplo de cómo se puede en este Congreso legislar a favor de que todos y todas tengan los mismos derechos.

Este proyecto es un gran avance, y si logramos sancionar la ley de identidad de género antes de fin de año, vamos a contar -como decía la diputada Ibarra- con una legislación de avanzada; pero no tenemos que conformarnos con eso.

Hay cuestiones que tienen que ver no sólo con la legislación o con la relación del Estado y los derechos de los ciudadanos sino también con la construcción de ciudadanía y con el eco y el respeto que esto debe tener en la sociedad en su conjunto.

Debemos trabajar fuertemente para que, a partir del reconocimiento de la identidad de género, ese reconocimiento de derechos implique, de una vez por todas, igualdad de oportunidades y el cese de la discriminación a la que muchas veces la sociedad somete a los ciudadanos objeto de esta ley.

Vuelvo a felicitar y a agradecer a todos los diputados por el esfuerzo de consenso y porque, por supuesto, este dictamen contempla y representa absolutamente el espíritu del proyecto que yo había presentado.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra la señora diputada Rodríguez.

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: quiero manifestar un especial agradecimiento a la lucha del movimiento por la diversidad o por el disenso, como quieran llamarlo, que son las personas verdaderamente protagonistas de esto que estamos haciendo hoy.

En realidad, ello no es más que una pequeña restauración frente a la violación de derechos que el Estado argentino ha tenido con ellas y con muchas más, que ya hoy ni siquiera están con nosotros para que podamos amparar sus derechos. Consideren que el promedio de vida de las personas trans es menos que 40 años. Es decir que por violar sus derechos, ya sea por acción o por omisión, los diputados y diputadas debemos hacernos cargo de que habitantes de este país tengan menos expectativa de vida que la mayoría del resto. Eso está en nuestras espaldas.

Por eso, es necesario que antes de que termine este período de sesiones ordinarias el proyecto de ley tenga dictamen y sea aprobado por la Cámara. Éste es el objetivo que nos tenemos que plantear.

Ya se ha mencionado que el proyecto se trata no de un mero cambio de DNI, sino del derecho a la identidad, que es un prerequisite para una cantidad de derechos. Ante todo, el derecho a la vida, pero también, el derecho a la educación, a la salud, al empleo en las relaciones laborales, etcétera.

El ejercicio de esos derechos está dependiendo de un derecho a la identidad plena y a la ciudadanía. Por lo tanto, con un proyecto como éste, en realidad no estamos haciendo otra cosa que pagar nuestras deudas.

Creo que, en todo caso, hay que agradecer y reconocer al movimiento, y pedirle perdón. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra el señor diputado Cigogna.

Sr. Cigogna.- Señora presidenta: comienzo mi exposición expresando mi acuerdo con la iniciativa en tratamiento. Su objetivo, según lo que hemos escuchado, es más que encomiable. Es hora de poner fin a un período de aberrante discriminación.

No obstante, voy a objetar dos artículos. Uno de ellos es el 5°, que dice: "Personas menores de edad. Con relación a las personas menores de 18 años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4° deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor."

Me parece improcedente y sumamente peligroso que por la sola voluntad de los padres, o de quienes fueren sus representantes, y la conformidad del menor -tengamos en cuenta que podría tratarse de una persona de 5 o 6 años de edad- se pueda cambiar no sólo su nombre sino también su identidad sexual en el Registro Civil.

Pero más grave que el artículo 5° es el artículo 11, cuyo segundo párrafo dispone: "Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona. En el caso de las personas menores de edad regirán los principios establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento."

Como en el caso anterior, a mi entender no se puede admitir que un menor de edad sea sometido a un tratamiento de esta naturaleza con el consentimiento de sus representantes legales y de ellos mismos. Insisto en que al hablar de "menores" puede tratarse de un adolescente o de un niño.

Por eso, exhorto a los señores diputados a que analicemos con mucho detenimiento estos dos artículos. Tal vez, podría ser procedente pensar en una intervención judicial para estos casos.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra el señor diputado Pais.

Sr. Pais.- Señora presidenta: al igual que el señor diputado Cigogna y demás diputados preopinantes, considero que esta ley es necesaria porque permitirá dar una justa reparación a un sinnúmero de personas que se sienten discriminadas por el Estado y por la sociedad toda. Sin perjuicio de ello, quisiera incorporar al debate dos observaciones mínimas.

La primera -si la señora diputada Rodríguez me permite- se vincula con el empleo del término "prenombre". Creo que esa palabra no condice con las expresiones jurídicas de nuestro derecho positivo, conforme lo establecido en la ley 18.248, ni con el significado que a ese término da el diccionario de la Real Academia Española. La única acepción que da a la expresión "prenombre" es: "Nombre que entre los romanos precedía al de familia."

Por su parte, la ley sobre inscripción de nombres de las personas se refiere al "nombre de pila". A mi entender, éste es el término correcto que se debería utilizar; por eso propongo que la expresión "prenombre" sea cambiada por la de "nombre de pila". De esa manera, la nueva norma sería congruente con la ley 18.248 y evitaríamos introducir un instituto novedoso que puede generar colisiones interpretativas entre ambas leyes, que deberán funcionar amalgamadas.

La segunda observación, que he elaborado hoy porque el texto del dictamen llegó a mis manos ayer...

Sra. Presidenta (Ibarra).- La Presidencia informa al señor diputado que el texto fue puesto a disposición de los miembros de la comisión hace dos semanas.

Sr. Pais.- No tiene importancia, señora presidenta. Es simplemente una cuestión instrumental.

Como decía, el segundo planteo que quiero hacer como un aporte constructivo a la norma, se relaciona con las previsiones de la Ley de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y la ley 18.248. En ambas existen disposiciones que van a colisionar;

por eso, haría falta que en la última parte de la norma general se aclare que las dos quedan modificadas.

En un caso se trata del artículo 84 de la ley 26.413, de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas -sancionada recientemente-, que dice: "Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por orden judicial, salvo las excepciones contempladas en la presente ley. En todos los casos, antes de dictar resolución, los jueces deberán dar vista a la dirección general que corresponda. En las actuaciones respectivas será juez competente el que determine la jurisdicción local del domicilio del peticionante o el del lugar donde se encuentre la inscripción original. El procedimiento será sumario con intervención del Ministerio Público."

El segundo caso, que considero importante en términos de brindar seguridad jurídica, se vincula con la omisión de la publicación a que se refiere el artículo 17 de la ley 18.248. Dicha publicación, que en modo alguno pretende causar perjuicio o agravio, o perturbar emocionalmente a las personas que están reclamando el acceso a este derecho humano, tiene su explicación en el principio de seguridad jurídica; fundamentalmente, de los acreedores.

El DNI no es el que se endeuda; quien contrae una deuda, obtiene créditos y puede ser sujeto pasivo de acciones judiciales es la persona, que de acuerdo con la ley 18.248 tiene un nombre. A ella se demanda: a la persona con nombre. Por eso, para el cambio de nombre enmarcado en los casos habilitados por la propia ley, se prevé el mecanismo que expliqué anteriormente.

El artículo 17 de la ley 18.248, dice: "Deberá requerirse información sobre medidas precautorias existentes en nombre del interesado." Entonces, a fin de que la norma no se desnaturalice, se podría agregar que más allá de la inscripción, el oficial del Registro tenga las mismas obligaciones previstas en el mencionado artículo 17. O sea que requiera información sobre las medidas precautorias existentes en nombre del interesado.

De esta manera, una inhibición general -por ejemplo- podría ser notificada al juez competente y no se vulneraría el derecho de un eventual acreedor.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra la señora diputada Alonso.

Sra. Alonso.- Señora presidenta: esta es una tarde importante, donde no sólo estaremos dictaminando sobre un proyecto de ley relacionado con la igualdad y la lucha contra la discriminación sino también debatiendo profundamente sobre la libertad, concepto que algunas veces desaparece de nuestro vocabulario y que sería bueno poner nuevamente sobre la mesa.

En este caso nos referimos concretamente a la libertad que tenemos las personas de elegir cómo queremos vivir nuestra propia vida. Por eso adelanto que acompañaré con mi firma el dictamen de comisión.

Creo que algunos de los comentarios del señor diputado Pais son para tener en cuenta; ciertas cuestiones vinculadas con tecnicismos podrían ser mejoradas de aquí a que el asunto sea tratado en el recinto. También yo he redactado algunas sugerencias que podrían ser revisadas e incorporadas al dictamen.

Además de adelantar mi apoyo, reitero que es fundamental recordar que estamos hablando sobre la libertad de las personas. La discusión respecto de este tema no está saldada en la sociedad. Hace falta educar y educarnos mucho más; por eso, quienes estamos en esta sala y todos los que defienden esta causa, debemos transformarnos en docentes multiplicadores en favor de la libertad, la igualdad y la no discriminación.

Queda mucho por hacer, porque todavía nuestra sociedad no llega a comprender mayoritariamente este tipo de decisiones.

Me parece que son justas, que son las que corresponden, que el Estado debe garantizarlas; pero creo que tenemos que trabajar, seguir trabajando y profundizar nuestra tarea docente de construcción de ciudadanía para que todos y cada uno de los argentinos y de las argentinas abracen estas causas y las honren en el día a día y en las decisiones y acciones que tomamos cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra la señora diputada Storani.

Sra. Storani.- Yo tampoco soy miembro de ninguna de las dos comisiones, pero sí soy firmante de dos de los proyectos que se han iniciado en la Cámara. Quiero compartir que yo siento que es un día histórico; es un día, en realidad, que va a significar justicia para todos estos movimientos sociales por la diversidad, que se vienen organizando y que vienen sufriendo hace tantos años. En ellos quiero rescatar especialmente a la CHA, a la ATTA y, especialmente, a Esteban Paulón, que está aquí presente, que es el presidente de la federación, que desde que yo asumí no ha dejado ni un minuto de visitarme para traerme todo el material necesario para interiorizarnos con este tipo de temas de los que, a pesar de ser militante del movimiento, desconocíamos muchas de las situaciones espantosas de discriminación a que se han sometido todos estos años.

Me parece que en esta etapa de afianzamiento democrático, donde las libertades son lo más importante, desde este Congreso, con estos diputados, estamos dando una reparación, un mensaje reparador y un mensaje de justicia.

En ese sentido, quiero rescatar a la ex diputada Silvia Augsburger, que ha sido la primera que presentó un proyecto en la Cámara de Diputados. (Aplausos.) También por ella nos pudimos interiorizar de este tema, y así fue que antes de ingresar a la Cámara, y después de haber asumido, he tenido contacto con todos ellos para poder conocerlo.

Así que quiero felicitar a la comisión. No voy a opinar de este despacho, porque no me corresponde, pero me parece que vamos a poder llevarlo al recinto y ése va a ser un día histórico. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra la señora diputada Stolbizer.

Sra. Stolbizer.- Señora presidenta: simplemente quiero sumarme. Me siento parte -y nuestro bloque ha sido parte- de esto que es claramente es una construcción políticamente plural y sobre todo de una gran raíz social.

Esto es, sin ninguna duda, el resultado de una lucha y de un sufrimiento de largo tiempo, porque también creo que numerosa cantidad de gente dejó mucho de lo propio en la lucha -y muchos quedaron en el camino, incluso- para alcanzar este resultado. Que esto valga también para honrar a aquellas personas que con su sacrificio y habiendo sufrido de manera personal, durante mucho tiempo, humillaciones y distintas formas de discriminación, han luchado para conseguir esto. Eso también se debe a toda esa gente.

Creo, tal cual lo planteaba la diputada Laura Alonso, que estamos frente a una cuestión de derechos. Obviamente estamos frente al reconocimiento a través de la habilitación del ejercicio operativo de los derechos. Cuando tantas veces hablamos de que el Estado debe ser el garante de los derechos humanos, de los derechos

de las personas, tantas veces nos cuesta implementar los mecanismos para garantizar el ejercicio operativo de esos derechos y, por lo tanto, me parece que esta ley es un gran avance en términos de hacer operativos los derechos; porque los derechos los tienen. Los derechos no necesitan una ley que diga que los tienen, sino que en realidad, lo importante es hacer operativo el ejercicio de esos derechos.

Y lo que también se mencionaba, y comparto, es que ésta es una discusión sobre la libertad, sobre la forma en la cual nosotros, legisladores y el Estado en general, estamos dispuestos a garantizar a las personas el ejercicio de sus libertades públicas. Por lo tanto, me parece que esto es central.

Me pareció también importante incorporar siempre la contrafigura de las obligaciones o prestaciones que el Estado debe garantizar y, en particular, las que tienen que ver con la salud, es decir, las prestaciones de salud, porque eso es, efectivamente, hacer operativo el ejercicio de los derechos.

De lo contrario, nos quedamos simplemente en cuestiones declarativas; pero este dictamen avanza correctamente en el sentido de la operatividad de los derechos.

Finalmente, creo que necesitamos hacer el mayor de los esfuerzos para que la alegría y la celebración del día de hoy por firmar este dictamen no vaya a correr riesgos de truncarse por la falta de un acuerdo político que realmente nos permita llevar al recinto este proyecto y aprobar la ley antes de fin de año. (Aplausos.)

En ese sentido creo que tenemos que hacer todo tipo de esfuerzos. No sirve simplemente firmar el dictamen, quedarnos contentos e irnos de acá celebrando. Todos sabemos lo que significa terminar aprobando una ley.

Por ello creo que hay que hacer esfuerzos en dos sentidos.

Tal cual lo plantearon los diputados Pais y Cigogna, en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con especificaciones del texto más bien técnicas, el primer esfuerzo es hacer todas las correcciones necesarias para que el despacho sea lo menos vulnerable posible. Necesitamos asegurar un muy buen texto que no corra riesgo de tachas de ningún tipo. Por lo tanto, en los días que nos quedan hasta que el proyecto sea tratado en el recinto, tratemos de construir este consenso basado en lo técnico.

El otro esfuerzo que debemos hacer es el político. Es decir, garantizar la realización de una sesión en la cual el dictamen sea aprobado.

En ese sentido manifiesto el apoyo absoluto de nuestro bloque para poder construir estos dos consensos y obtener el resultado que todos queremos. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra el señor diputado Barrios.

Sr. Barrios.- Señora presidenta: no pertenezco a la comisión pero quiero sumar mi expresión de adhesión al dictamen consensuado que se está poniendo a consideración en esta reunión, porque creo que significa un avance en la actividad parlamentaria, que recoge antecedentes que existieron en este Congreso Nacional a partir del año 1999, cuando Alfredo Bravo y otros diputados que lo acompañaron presentaron por primera vez un proyecto en este sentido.

Otro antecedente es del año 2007, cuando el bloque del Partido Socialista presentó este proyecto de autoría de la diputada Augsburguer, que yo he vuelto a presentar. Por eso, como autor de uno de los proyectos que da origen a este debate -registrado bajo el número de expediente 1.879-D.-2011- es que estoy aquí.

Más allá de eso, fundamentalmente no hay que dejar de reconocer que este proyecto ha sido trabajado, impulsado y militado

por la Federación Argentina LGBT (IQ), la Attta y la CHA, que son los que con su empuje han instalado en la agenda parlamentaria este debate, que no es más que la discusión de una ley que garantice el derecho a todos los derechos.

Éste es un día muy importante que expresa el avance en la necesidad de contar con una ley de identidad de género que nos permita reparar violaciones en materia de derechos humanos cuando existe imposibilidad de acceder a un nombre que refleje la identidad de una persona, porque no tener acceso a un documento de identidad que acredite la identidad de género ocasiona múltiples inconvenientes a muchas personas trans.

Por eso, concuerdo con el objetivo general señalado, que es asegurar la dignidad y el proyecto de vida de las personas trans, garantizando el derecho a la identidad.

Seguiremos planteando, tal como lo decíamos en el proyecto, alguna diferencia que tiene que ver con la creación de una oficina de identidad de género que nosotros proponíamos que estuviera en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos ya que la iniciativa no hace más que respetar los derechos humanos en su concepto más amplio y como parte indisoluble del derecho a la no discriminación.

Toda persona tiene derecho a su propia identidad, a ser considerada como realmente es; a ser ella y no otra. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra el señor diputado Recalde.

Sr. Recalde.- Señora presidenta: quiero transmitir mi opinión personal, que creo es compartida por el bloque al cual pertenezco, respecto de la necesidad de establecer por ley el derecho a la identidad de género.

Adhiero a las palabras de la señora diputada Stolbizer en el sentido de que es posible compatibilizar el derecho con la técnica. Tenemos que garantizar el tratamiento del tema; por eso creo que podríamos firmar el dictamen de comisión hoy, ya que de aquí a su consideración en el recinto hay tiempo para introducir correcciones, algunas de las cuales son técnicamente muy oportunas.

También quiero decir que lo que ahora estamos defendiendo no se vincula sólo con la libertad sino también con la igualdad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Ibarra).- En primer lugar, expreso mi enorme satisfacción ante este avance en la firma del dictamen propuesto. Es un gran orgullo, porque es el resultado de un trabajo de mucho tiempo en el que participó gran cantidad de gente. Además, siento un enorme orgullo a nivel personal porque fue la Comisión de Legislación General la que, como cabecera, tuvo la responsabilidad de buscar consensos tanto en el ámbito legislativo como en el de las organizaciones sociales.

En segundo término, definiendo el consenso técnico; sin duda, es posible ver y mejorar diferentes aspectos. A propósito de ello, me referiré a los puntos de los que se habló durante la reunión. Tenemos redactado el texto del dictamen y creo que en un rato contaremos con las firmas necesarias. Luego, nos queda la instancia del tratamiento en el recinto para analizar los planteos que se han hecho. Cuando se haya suscripto el dictamen lo voy a informar, pero ahora me gustaría analizar algunas observaciones técnicas que hicieron los señores diputados.

En cuanto a la necesidad o no de publicar edictos ante una modificación, para facilitar cuestiones vinculadas con la seguridad crediticia y demás...

Sr. Pais.- Si la señora presidenta me permite, justamente hice la salvedad de que consideraba adecuada la excepción de no publicar edictos. Lo único que dije fue que sin perjuicio de considerarlo adecuado, se podría incorporar una disposición similar a la de la segunda parte del artículo 17, a fin de que el funcionario tome nota de las medidas precautorias existentes en nombre del interesado. De esta manera, sin publicarse un edicto, el funcionario podría recabar esos datos.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Eso lo tomamos, señor diputado.

De todas formas, aclaro que en el artículo 10 del dictamen se deja específicamente una puerta abierta para que esa tarea quede a cargo del Poder Ejecutivo. El mencionado artículo dispone: "El Registro Nacional de las Personas informará el cambio de documento nacional de identidad al Registro Nacional de Reincidencia; a la Secretaría del Registro Electoral correspondiente para la corrección del padrón electoral y a los organismos que reglamentariamente se determine." Esta última parte la hemos incluido porque se pueden crear nuevos registros.

En suma, dejamos abierta la puerta para que sea el Poder Ejecutivo el que tenga la posibilidad de establecer esto reglamentariamente. Sin perjuicio de que podemos analizar la sugerencia del señor diputado, quiero que quede en claro que no nos limitamos a una o dos notificaciones porque nos pareció apropiado dejar, en el artículo 10, un margen importante para que el cuidado de la seguridad jurídica se pueda establecer reglamentariamente.

Sr. Pais.- El artículo 17 rige para todos los cambios de nombre. Entonces, sería bueno ratificar que no es de aplicación la publicación de los edictos pero sí esta disposición.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Entiendo su postura, señor diputado. Simplemente digo que el cuidado de la seguridad jurídica está previsto en el dictamen.

Comprendo que su aporte es superador, pero permítame defender la calidad técnica del texto que hemos elaborado porque la seguridad jurídica estuvo presente a la hora de formular el dictamen.

Sra. Rodríguez.- Creo que la cuestión está implícita, pero si el señor diputado quiere que se incluya una remisión expresa...

Sra. Presidenta (Ibarra).- No hay inconveniente alguno en hacer una remisión.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Creo que estamos de acuerdo.

El señor diputado solicita que se incluya una remisión explícita, y entiendo que no habría ningún inconveniente en incorporarla durante el debate en el recinto. Reitero que quiero defender la calidad técnica del texto elaborado porque siempre tuvimos absolutamente presente la seguridad jurídica. Por eso establecimos la necesidad de que el Poder Ejecutivo contemple en la reglamentación todas las notificaciones que hagan falta, a fin de garantizar claramente la seguridad jurídica en los negocios y en todo otro aspecto.

En lo que se refiere al término "prenombre", no veo inconveniente en que sea cambiado por la expresión "nombre de pila".

En cuanto a la observación planteada por el señor diputado Pais respecto a la que comúnmente se conoce como "ley del

nombre", quiero aclarar que la norma que se sancione es especial y posterior. El señor diputado habló de la intervención del juez y demás, pero al ser de carácter especial y posterior, esta norma primará sobre aquella.

Sr. Pais.- Si la señora presidenta me permite, esa observación que hice no se vinculaba con la ley del nombre sino con la Ley del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que es especial y lleva el número 26.413.

Como esta ley que regula el funcionamiento de los registros es especial, mi propuesta fue que en la norma que se sancione se aclare que la ley 26.413 -no la ley del nombre- queda modificada.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Me parece que no es necesario modificar específicamente la Ley del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que rige para todos los casos, porque ahora estamos hablando de una ley especial sobre identidad de género. Esta norma, que como dije antes es especial y posterior, regulará las inscripciones relativas a la identidad de género. No es que con la sanción de la nueva ley se van a modificar todas las inscripciones del Registro Civil. Por eso no quisimos tocar ese punto, como tampoco nos pareció conveniente hacer referencia a otras leyes.

Esta ley especial no surge de la modificación de distintas normas sino que tiene por objeto regular todos aquellos derechos vinculados con la identidad de género.

Sr. Pais.- Como la ley especial sobre funcionamiento de los registros rige en todo el país, me pareció que nada costaba agregar al final del texto que la nueva norma modificará toda disposición de aquella ley especial vinculada con este tema.

De todas formas, si el funcionario público interpreta la norma de buena fe, aplicará la ley sobre identidad de género, que es posterior.

Como con la sanción de esta iniciativa se deroga la ley 17.132, pensé que se podía establecer...

Sr. Tunessi.- Si el señor diputado me disculpa, por una cuestión de técnica legislativa es mejor hablar en términos genéricos que específicos para evitar omitir alguna ley. Es mejor que la ley posterior sea genérica.

Sra. Rodríguez.- Además, sería confuso.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Reitero que la nueva norma regulará específicamente el derecho a la identidad de género.

Sr. Pais.- Otra posibilidad es incluir un artículo que diga: "Sustitúyese el artículo 84 de la ley 26.413..." Así quedaría mucho mejor. Ese artículo dispone: "Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por orden judicial, salvo las excepciones contempladas en la presente ley. En todos los casos, antes de dictar resolución, los jueces deberán dar vista..." Creo que es conveniente mencionar esta ley especial, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Ello es absolutamente innecesario. Estamos dictando en 2011 una ley que establece que no habrá intervención del juez. A los fines jurídicos está clarísimo, señor diputado.

Sr. Pais.- Cuando un funcionario público -como ya ha pasado sin esta nueva ley en vigencia- se oponga e invoque aquel artículo 84, recordaremos que podríamos haber sido redundantes. La señora

presidenta sabe que hay funcionarios que pueden actuar de esa manera.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Finalmente, quiero hacer un comentario sobre el tema de los menores.

Tengo en mis manos un artículo de Human Rights Watch, del que me gustaría leer una parte que se refiere a la cuestión específica de los menores.

Dice así: "El nuevo marco legal también debería permitir a niños transgénero cambiar su sexo legal antes de alcanzar la edad adulta, por el hecho de que puede ser lo mejor para algunos de ellos, señaló Human Rights Watch. No debería haber ninguna edad mínima. En cambio, las circunstancias individuales de cada niño deberían determinar si lo mejor para éste es cambiar su sexo legal.

"El niño transgénero debería estar autorizado a manifestar su opinión sobre la necesidad de cambiar su sexo legal, y debería aumentar el peso concedido a esa opinión a medida que el niño se va aproximando a la mayoría de edad."

Nosotros estamos incorporando, sin dudas, la participación y la integración definitiva de los representantes legales y, por supuesto, el consentimiento informado.

Quiero decir que huelga manifestar que un chico de 5 años de ninguna manera puede dar un consentimiento informado. Todo lo que reglamentamos lo estamos haciendo en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, motivo por el cual debe haber un consentimiento informado, con lo que significa el consentimiento informado...

Sr. Cigogna.- ¿Quién evalúa el consentimiento informado?

Sra. Presidenta (Ibarra).- Además, además hay abogado del niño.

Sr. Cigogna.- Hay abogados de todo el mundo. ¿Quién me garantiza que el abogado va a estar presente en el Registro Civil cuando le van a cambiar el nombre, el sexo?

Sra. Storani.- Lo tiene que acompañar en todo el proceso, según la ley.

Sr. Cigogna.- ¿Dónde dice eso?

Sra. Presidenta (Ibarra).- La ley de protección integral del niño...

Sr. Cigogna.- No nos ponemos de acuerdo.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra la señora Storani.

Sra. Storani.- Todas estas etapas están bien previstas en la ley 26.061. No tengo los artículos específicos, pero, por ejemplo, cuando un niño tiene que dar su consentimiento para la adopción -que es otro tema que estamos estudiando también en este Congreso- tiene la posibilidad de ser acompañado en todo el proceso por el abogado del niño, que es una figura que habilita la ley, precisamente.

Con estos documentos que organizaciones internacionales como Human Rights Watch han manifestado, vemos que estas situaciones se dan. Yo entiendo la preocupación del diputado Cigogna en el sentido de una situación de protección, de tutela hacia el niño, con la convención internacional de los derechos del niño, tomando al niño como sujeto de derecho, donde pueda decidir

él muchísimas cuestiones; habilitado por una figura, que es el abogado del niño, puede manifestar todas estas cuestiones que están previstas en la ley 26.061.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Quiero agregar que en realidad estaba haciendo uso de la palabra yo. Esto se relaciona también con el abandono escolar, muchas veces vinculado a la grave problemática que tenemos con muchos de los chicos que hacen abandono de la escuela por motivos de discriminación y por las situaciones de violencia que deben vivir.

Sin perjuicio de esto yo quiero plantear, y me lo dijo con mucho criterio el diputado Favario, el trabajo que hemos hecho.

Recojo la inquietud del diputado Cigogna y creo que podemos trabajarla, evaluarla y avanzar en este sentido. Creo que hay un consenso en los términos del dictamen. Hoy estamos avanzando en ese sentido. No sé si el diputado Cigogna va a acompañar el dictamen, pero eventualmente puede manifestar una disidencia...

Sr. Cigogna.- Quiero responder a la afirmación de la diputada. La diputada menciona otra ley, incluso los criterios de Human Rights Watch. La presidenta acaba de decir hace segundos, minutos, que ésta es una ley especial, etcétera, que regula esta materia, y que no son aplicables otras normas como, por ejemplo...

Sra. Presidenta (Ibarra).- Es al revés. Específicamente, en el artículo...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Cigogna.- Garantizamos en la ley específicamente los derechos del niño y su derecho, incluso, a su inmadurez, porque los chicos de determinada edad son inmaduros, por supuesto.

Entonces, cubrámoslos, protejámoslos, no los dejemos en manos del progenitor que puede ser razonable o no razonable, y mucho menos, de un señor del Registro Civil...

Sra. Storani.- Se menciona la ley 26.061.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Efectivamente.

Sra. Rodríguez.- Estaba en uso de la palabra, señora presidenta...

Sra. Presidenta (Ibarra).- En realidad, estaba en uso de la palabra yo, me interrumpió el diputado. Vuelvo, recuperando lo que decía la diputada Storani.

Específicamente, en el artículo 5° se hace referencia a lo siguiente: "...de acuerdo a lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes."

Sr. Cigogna.- Leamos el texto completo, porque el párrafo comienza así: "Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento..."

Sra. Presidenta (Ibarra).- Pero la Constitución Nacional incorpora la Convención sobre los Derechos del Niño, señor diputado.

Sr. Cigogna.- Mi querida diputada: si no hay un juez, una autoridad o un funcionario con autoridad equivalente que evalúe y tome la decisión, esto queda librado al azar y a las circunstancias de cada caso en particular.

Por favor, les pido que recapacitemos y que tomemos los recaudos necesarios.

Yo estoy absolutamente a favor del proyecto, pero protejamos a los niños.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra la señora diputada Rodríguez.

Sra. Rodríguez.- En realidad yo quiero partir de la realidad, que me parece que es lo que no se tiene en cuenta acá.

En este momento hay una cantidad de criaturas -justamente no les voy a asignar yo el sexo- que nacen con ambos órganos y finalmente es el médico o los padres los que deciden qué hacer. Voy a ser muy vulgar en cómo cuento la historia, pero más o menos les dicen: "¿Qué quiere que sea? ¿Nene o nena?" Porque suponen que no hay otra situación en este mundo que ser nene o nena. Esta es la realidad vigente. De hecho, médicos y médicas mutilan a criaturas que nacen en estas condiciones todo el tiempo.

Los casos de personas nacidas en estas condiciones son muchas más de las que se conocen y se cree. Realmente hay una cantidad de criaturas cuya situación no pasan por ninguna autorización judicial. La decisión pasa por la madre o el padre, y fundamentalmente por la hegemonía del discurso médico, que básicamente se impone, porque le parece que da más para clítoris que para pene. Es así de simple.

Aclaro que quiero ser vulgar porque esto es lo que pasa. Sin embargo, no nos estamos preocupando por esto pase. No nos estamos preocupando porque en este momento alguien esté violentando la identidad de esa persona. No nos estamos preocupando que alguien que esté decidiendo por ella, ya se trate del médico o de los padres.

Por supuesto, en estos casos, ni se habla del consentimiento informado. Es más, probablemente ni los médicos den consentimiento informado a los padres. No pasa eso. Seguramente deben considerarlo como una operación de urgencia. Entonces, no hay consentimiento informado ni para eso.

Estamos partiendo de esa realidad, donde no es que no se vulneren derechos. Justamente son esos derechos los que están siendo vulnerados ahora; para eso, lo que sí debería funcionar es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía por sobre todo el resto que exista, sea específico o no.

La Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es regulatoria de la Convención, que tiene jerarquía constitucional. De manera que si hay una ley específica, la jerarquía mayor se impone sobre la jerarquía menor.

La realidad es que hay una cantidad de tratamientos que se requieren empezar en la pubertad, como por ejemplo la toma de hormonas o el cambio de algunas cuestiones corporales. Porque una persona que nació en esas condiciones o con genitales masculinos, lo adecuado es que pueda tener acceso a los tratamientos médicos desde la pubertad.

¿Qué pasa, si no, en la realidad? En lugar de implantes de siliconas, se aplica aceite para motores de avión o camiones. ¿Por qué creen que estas personas viven aproximadamente treinta años? No es sólo porque la policía las muele a palos, las violan y no tienen acceso a la salud. Esto es lo que sucede, señores diputados.

Ahora bien; en un contexto de seguridad, de protección de los derechos, esta posibilidad de acceder a un tratamiento adecuadamente es la manera más cuidadosa para un niño o niña.

Si alguien cree que terminará siendo algo distinto, le aseguro que no hay forma. Si un hombre despertara mañana en el cuerpo de una mujer, no por ello se va a sentir mujer.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Si la señora diputada me disculpa, cumplo en informar que en este momento, habiendo quórum en ambas comisiones, se ha reunido la cantidad de firmas necesarias para suscribir el dictamen de comisión.

- Aplausos prolongados y manifestaciones en la barra.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Rodríguez.

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: simplemente agrego que entiendo la preocupación manifestada por algunos diputados, pero les pido que observen la realidad y vean lo que está pasando.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra el señor diputado Tunessi.

Sr. Tunessi.- Señora presidenta: el señor diputado Cigogna ha hablado de la necesidad de que haya una autorización judicial, pero si leemos el artículo 5° del dictamen nos daremos cuenta de que se plantean dos alternativas: una es que den su consentimiento los representantes legales y el menor manifieste expresamente su conformidad. Otra, que si no es posible obtener el consentimiento de alguna de las partes, un juez resuelva la cuestión considerando la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y los principios de capacidad progresiva e interés superior estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Supongamos que estamos frente a la primera hipótesis. Cuando discutimos el tema en comisión, concluimos que no era necesaria la intervención judicial porque quien ejerce la representación legal del menor tiene la patria potestad. Ahora bien; si quien tiene la patria potestad quisiera provocar un daño al menor, habría que revocársela. Pero no es algo que se pueda prever.

El señor diputado considera que reconocer la identidad de género puede ser causal de daño. Pero no estamos hablando de una mutilación sino del derecho de los padres, que ejercen la patria potestad legalmente, de autorizar un cambio de identidad. No hay otra razón, señor diputado. Si no hubiere consentimiento, interviene la Justicia en consulta con los principios de capacidad progresiva e interés superior del menor de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Entiendo que a pesar de esta disposición, el señor diputado quiera contar con la autorización judicial, pero en verdad no hace falta; además, se estaría sustituyendo la patria potestad cuando está plenamente vigente su ejercicio por parte de los representantes legales del menor. Entonces, no sé por qué en este caso habría que cambiar la patria potestad cuando en otras situaciones no se procede de igual manera.

No estamos hablando, reitero, de un daño al menor o de una mutilación; no es que le van a cortar un dedo. Simplemente decimos que si los padres, que ejercen la patria potestad, creen que su hijo tiene razón cuando solicita el cambio de identidad, lo pueden autorizar. Si no hay consentimiento, entonces sí corresponde la intervención de un juez y tomar en cuenta las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Tiene la palabra la señora diputada Storani.

Sra. Storani.- Señora presidenta: sólo quiero hacer una mención especial. Cuando hice uso de la palabra, olvidé nombrar al Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.

- Aplausos y manifestaciones en la barra.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Entiendo la alegría, pero más allá de que hayamos firmado el dictamen de comisión, el debate continúa. Entonces, es necesario que podamos avanzar.

Tiene la palabra el señor diputado Cigogna.

Sr. Cigogna.- Señora presidenta: me permito recordar al señor diputado Tunessi que el derecho civil argentino establece que un menor emancipado, que hoy día puede ser solamente un menor que se ha casado -o sea que no puede tratarse de una persona de 10 años-, ni siquiera con el consentimiento de un juez tiene la posibilidad de disponer de bienes recibidos por donación o herencia. ¿Pero resulta que sí podría cambiársele el nombre?

Sra. Presidenta (Ibarra).- No hay menores emancipados, señor diputado.

Sr. Cigogna.- Sí que hay, señora presidenta. No existe la emancipación dativa, pero sí la emancipación por matrimonio.

De acuerdo con nuestro Código Civil, un menor emancipado no puede disponer de los bienes adquiridos por título gratuito y tampoco de aquellos que haya recibido por donación o herencia. ¿Pero resulta que si los padres lo solicitan puede cambiar su nombre? No estoy de acuerdo, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Ibarra).- La emancipación por matrimonio ya no existe; es sólo por dispensa judicial.

Sr. Cigogna.- No; la emancipación es por matrimonio.

Sra. Presidenta (Ibarra).- La edad para casarse es de 18 años; la hemos modificado.

Sr. Cigogna.- Para casarse, pero no para disponer de los bienes.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Pero no hay más emancipación por matrimonio, salvo el caso de dispensa cuando se trata de menores de 18 años...

Sr. Cigogna.- La persona se casa con autorización judicial y se emancipa.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Los años que debe tener una persona para alcanzar la mayoría de edad se modificó.

Sr. Cigogna.- Lo sé.

Sra. Presidenta (Ibarra).- A los 18 años, una persona puede casarse. Antes, la edad es un impedimento.

Sr. Cigogna.- Se puede casar con consentimiento judicial y queda emancipado.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Sí, es la dispensa...

Sr. Cigogna.- Está bien, señora presidenta.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Con la disidencia del señor diputado Cigogna, que podremos analizar en el recinto, la presidencia informa que hemos logrado suscribir el dictamen de las comisiones.

- Aplausos y manifestaciones en la barra.

Sra. Presidenta (Ibarra).- Antes de dar por concluida la reunión, la presidencia recuerda que en el transcurso del debate se plantearon algunas propuestas. Continuaremos las conversaciones, porque se han hecho aportes y de aquí a que el tema sea tratado en el recinto podremos seguir debatiendo.

Como presidenta de la Comisión de Legislación General, asumo personalmente el compromiso de trabajar en conjunto con la presidencia de la Comisión de Justicia -tal como lo hemos hecho hasta ahora- a fin de lograr el mayor consenso posible. Por supuesto, también hablaremos con las organizaciones sociales.

Hechas estas consideraciones, declaro finalizada la reunión felicitando a todas y a todos por este gran logro. (Aplausos.)

- Es la hora 17 y 38.